



República de Panamá
Procuraduría de la Administración

Panamá, 25 de agosto de 2025
Nota C-223-25

Licenciado Dudley:

Ref.: Pago de la Prima de Antigüedad a ex servidores públicos.

Me dirijo a usted en esta ocasión y, con nuestro acostumbrado respeto, en atención a su nota AAC-NOTA-2025-4079, recibida en este Despacho el 13 de agosto del presente año, a través de la cual nos consulta un número plural de interrogantes, todas relacionadas al reconocimiento del pago del derecho de la prima de antigüedad a ex servidores públicos, desvinculados con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 241 del 13 de octubre de 2021.

Sobre la base de lo solicitado, debemos indicar que el numeral 5 del artículo 220 en concordancia con numeral 4 del artículo 3 y el numeral 1 del artículo 6 de la Ley No. 38 de 2000¹, establece que a la Procuraduría de la Administración le corresponde servir de consejera jurídica de los *servidores públicos administrativos* que consultaren su parecer respecto a determinada interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en un caso concreto; no obstante, dicha asesoría Jurídica que se encuentra reservada exclusivamente para los representantes legales de las instituciones consultantes, quienes son por lo general, los que toman las decisiones administrativas; salvo en los casos que exista un acto administrativo previo por parte de la máxima autoridad de la institución consultante, por medio de cual delegue (*siempre que este se encuentre dentro de sus competencias*), esta facultad en otro servidor público de la misma entidad.

Licenciado
CÉSAR DUDLEY
Director Jurídico de
Autoridad Aeronáutica Civil
Ciudad

Dicho en...

¹ Cfr. Gaceta Oficial Digital No. 24109 de 2 de agosto de 2000.

Dicho en otras palabras, tanto la atribución, misión y función que ejerce Procuraduría de la Administración de servir de conseja jurídica **está limitada a los servidores públicos administrativos con mando y jurisdicción** que consulten su parecer respecto a determinada interpretación de la ley o el procedimiento a seguir en un caso en concreto.

A efectos de esa atribución, es esencial que la formulación de la consulta jurídica, cumpla con los siguientes requisitos, los cuales responden a la interpretación de la ley. Veamos:

- a) **Debe ser formulada por un servidor público administrativo que esté legitimado para decidir, en representación de la entidad consultante.**
- b) Debe versar sobre la interpretación de la ley o el procedimiento que se debe seguir en un caso en concreto.
- c) Debe ir acompañada del criterio legal de la entidad, salvo aquellas instituciones que carezcan de asesor jurídico.
- d) No debe ser asunto cuya competencia sea atribuido por ley a otra autoridad.

En este sentido, vemos que estos supuestos jurídicos en el caso que nos ocupa, no se configuran, habida cuenta que quien promueve la solicitud de análisis de la ley administrativa (las consultas) **no es un servidor público con mando y jurisdicción**; en consecuencia, bajo este escenario, no es dable a este Despacho emitir un dictamen de fondo, en cuanto a lo solicitado.

Atentamente,


GRETTEL VILLALAZ DE ALLEN
Procuradora de la Administración



GVdeA/ca
Exp. C-205-25